

propios actos reclamados, vendrían á ser, en realidad, á la vez jueces y partes en un mismo negocio, lo cual repugna á los principios mas elementales del derecho, y aun al simple sentido comun.

Que en defensa de los que estimen violadas sus garantías individuales, por los Tribunales de la federacion, queda siempre vivo y subsistente el recurso de exigirles la responsabilidad en que hubieren incurrido, cambiándose, así, mas bien en la forma que en la sustancia el amparo constitucional.

Que como última y definitiva contestacion á las objeciones que pudieran todavía formularse respecto de los inconvenientes de la interpretacion que se da al texto de la Constitucion, queda el razonamiento de que en las instituciones humanas, se acaba siempre por llegar á un punto del que ya no se puede pasar, por mas imperfecciones que presenten.

En virtud de estas consideraciones y fundamentos, se decreta:

Que se reforma la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Yucatán, pronunciada en 19 de Agosto del corriente año, declarándose improcedente el recurso de amparo promovido contra el C. Magistrado primer suplente del Tribunal de Circuito de Mérida, por violacion del art. 8º de la Constitucion federal.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; y firmaron.—*José M. Iglesias. M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José G. Ramirez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 17 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por D. Ramon Alvarez Nieto, contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Tesorero del fondo de instruccion pública, ha informado que procede á hacer efectiva la multa de diez pesos que el Tribunal Superior de Justicia del Estado impuso á D. Ramon Alvarez Nieto, en virtud de la ley del mismo Estado de 11 de Mayo de 1869, y en cumplimiento del deber que le impone la de facultad económica coactiva. Y de la copia que presentó el quejoso, aparece que el Tribunal Superior, al imponer la expresada multa, cumplió tambien con el deber que le impone el art. 234 de la ley, para la Administracion de Justicia, en lo que no hay violacion alguna de garantías de que deba conocer la Justicia federal; procediendo, ademas, el acto reclamado, de un negocio judicial, contra el que la ley de 20 de Enero de 1869, en su art. 3º, niega el recurso de amparo.

Con tales fundamentos, el Promotor fiscal no puede pedir otra cosa, sino que: Se deniegue á D. Ramon Alvarez Nieto la suspension que solicita del embargo con que le tiene conminado el C. Tesorero del fondo de instruccion pública, y es lo que pide en cumplimiento de su deber.

San Juan Bautista, Agosto 24 de 1874.

—*Lic. Cordera.*

Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal no encuentra mérito para variar el juicio que externó sobre este negocio en su pedimento anterior; por lo que reproduciéndolo en lo conducente para cumplir con el art. 9º de la ley de la materia, pide: Que por los fundamentos allí expresados, se deniegue á D. Ramon Alvarez Nieto el amparo que solicita.

San Juan Bautista, Agosto 28 de 1874.
—*Lic. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Setiembre 2 de 1874. — *Gabriel Sosa*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Agosto 31 de 1874.
—Vistos estos autos de amparo intentado por el C. Ramon Alvarez Nieto, con motivo de una multa de diez pesos que le impuso el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por una expresion descomedida, segun demuestran los justificantes presentados por el promovente. Vistos los informes del funcionario ejecutor y del ministerio fiscal, y

Considerando: Que el artículo constitucional que el quejoso da como violado en su contra, es el 14 de la Constitucion nacional, y aunque no expresa en cual de sus conceptos se contiene, ha de ser el segundo, que dice: "Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley."

Que este precepto constitucional no tiene aplicacion alguna al caso de que se trata, porque el Tribunal que le impuso la multa por falta de respeto, está establecido con anterioridad, y ha usado de la atribucion que á todos los jueces y magistrados acuerda el art. 234 de la ley de administracion

de justicia del Estado, de 3 de Diciembre de 1857, por estas palabras: "Los magistrados y jueces cuidarán de que las partes les guarden el debido respeto, y se arreglen á las leyes en sus peticiones y demas actos consiguientes."

Que la aplicacion de este texto al caso del Sr. Nieto es exacta, porque los Tribunales no podrian cumplir con esta atribucion si ella no tuviera implícita la facultad de imponer penas correctivas, siempre que se les falte al respeto, como lo ha hecho el Sr. Nieto, calificando de "contraria al sentido comun" una providencia de aquella superioridad.

Considerando, por último: Que el caso en cuestion está indudablemente comprendido en el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que prohíbe el amparo en negocios judiciales.

Por estos legales fundamentos, el Tribunal decreta:

1º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Ramon Alvarez Nieto, contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que le impuso diez pesos de multa, por lenguaje irrespetuoso.

2º: Sin embargo, queda subsistente el auto de suspension inmediata, hasta la superior resolucion.

3º: Se tomará razon del amparo de pobreza del interesado, en cuya virtud se han admitido sus peticiones en papel de pobres, y se elevarán los autos á revision, conforme á la ley.

Lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo el Escribano que doy fé.—*L. Correa.*—Ante mí, *Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Setiembre 2 de 1874.—*Gabriel Sosa*, secretario.

BIBLIOTECA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 6 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Tabasco, por D. Ramon Alvarez Nieto, contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la que se le impuso una multa de diez pesos por haber solicitado, de una manera irrespetuosa, la revocacion por contrario imperio, de un auto pronunciado por el mismo Tribunal, cuya providencia viola, en concepto del quejoso, las garantías que consignan el art. 1º de la Constitucion y en especial la que contiene el art. 14, y

Considerando: Que la violacion de garantías se hace consistir en que el Tribunal de Tabasco carecía de facultad para imponer la multa en cuestion, pues se debe considerar como derogado el reglamento del mismo Tribunal de 1851 que le concedia esta facultad.

Considerando: Que ninguna de las prescripciones que contiene el título 1º de la Carta Fundamental de la República, prohíbe á las autoridades judiciales imponer esta clase de multas.

Considerando: Que no está justificado que se diera efecto retroactivo á la ley, con la providencia reclamada, ni que esta vulnera alguna otra de las garantías de que se ocupa el art. 14 constitucional.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

Es de confirmarse, y se confirma, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Tabasco, en 21 de Agosto del presente año, que declara:

1º: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Ramon Alvarez Nieto, contra la providencia del Tribunal Superior del Estado, que le impuso una multa de diez pesos por haber faltado al respeto al mismo Tribunal.

2º: No se impone al quejoso la multa de ley, por constar en autos su insolvencia.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Miguel Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Najera.—Ignacio M. Altamirano.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José G. Ramirez, —Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 2 de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

FIN DEL TOMO VI.